Miércoles, 08 de agosto 2012

Una crisis de legitimidad

http://thearchdruidreport.blogspot.com.es/2012/08/a-crisis-of-legitimacy.html

Durante la última semana o dos, la escena pico del petróleo ha seguido coqueteando con fantasías de súbito colapso. Esta vez, el detonante ha sido un reciente trabajo de David Korowicz de Feasta, del que hablé hace unas semanas y que se puede descargar en formato PDF aquí.

Como ya mencioné en esa entrada del blog, es un estudio bien escrito, limitado sólo por unos supuestos francamente poco realistas acerca de cómo los gobiernos tienden a reaccionar cuando se enfrentan a una amenaza inmediata para la supervivencia de la nación. Korowicz detalló los supuestos con suficiente claridad, de modo que un lector reflexivo puede detectar fácilmente los escenarios más improbables del estudio y extraer en cada caso su valor real. Korowicz tiene toda la razón al sugerir que el actual sistema financiero mundial es un castillo de naipes que fácilmente podría venirse abajo; si se evaporan de golpe billones de dólares de riqueza imaginaria, las sociedades industriales del mundo recibirían un durísimo golpe.

Korowicz sugiere que eso podría causar una parálisis en la economía global, no de una semana, sino durante muchos años, que la alejaría de la esfera de la realidad para dirigirla hacia el ignoto territorio trazado con mucha antelación por la afición de la civilización occidental por las fantasías apocalípticas. En el mundo real, por supuesto, los gobiernos que se enfrenten a un colapso financiero repentino no se cruzarán de brazos llorando como plañideras; tomarán medidas —hay muchas acciones que se emprender, ya que un colapso financiero en realidad no hace desaparecer el valor real de las cosas valiosas—. El dinero, recuérdelo por favor, no es la riqueza, es sólo un conjunto de símbolos arbitrarios que la gente utiliza en las sociedades complejas para gestionar la distribución de la riqueza real. Si un sistema monetario quiebra, se pueden improvisar fácilmente otros arreglos para facilitar el movimiento de la riqueza verdadera.

Con un rápido vistazo al último siglo de historia económica encontrarás bastantes ejemplos de gobiernos que respondieron a crisis financieras repentinas con medidas drásticas que funcionaron, al menos en el corto plazo Si bien siempre es popular decir que “esta vez es diferente” espero que mis lectores recuerdan las muchas otras veces que se ha dicho lo mismo al referirse a las burbujas especulativas (y es que, en realidad, nunca han sido muy diferentes). El paralelo es adecuado, ya que el creyente en el último delirio especulativo siempre utiliza esas palabras para convencerse de que no tiene que pasar por la experiencia común, pero incómoda, de tener que trabajar duro para hacerse rico. De la misma manera, sospecho que gran parte de la popularidad de los escenarios de rápido colapso provienen del hecho de que muchas personas quieren convencerse de que no tienen que lidiar con la experiencia común, pero no deseada, de la decadencia y caída de un civilización. La tentación de acabar de una vez, o al menos la de soñar con acabar de golpe, es muy fuerte.

Menciono todo esto otra vez porque esta semana he recibido bastantes correos relativos a otra interrupción súbita que se produce bastante a menudo en la historia, una que probablemente vamos a ver repetida en un futuro no muy lejano aquí en los EE.UU. y en otros lugares. Al igual que los sistemas financieros suelen caer súbitamente sin aviso, también lo hacen los sistemas políticos. En ambos casos, a pesar de que hacen falta años de mala gestión para llegar a la crisis, la propia crisis puede prender y extenderse repentinamente y traer un cambio en un tiempo muy corto; en ambos casos, a su vez, las secuelas implican pérdidas considerables, una gran cantidad de frenéticos apaños apresurados para intentar controlar los daños, y después un retorno a una “nueva normalidad” que a menudo se parece poco a lo que solía ser la vieja “normalidad”.

El poder político es una cosa notable. Aunque Mao Zedong tenía mucha razón al señalar que nace del cañón de un fusil, tiene que ser rápidamente trasplantado a un suelo más fértil o de lo contrario, se marchita y muere. Un sistema político exitoso de cualquier tipo establece rápidamente, en la mente de la población gobernada, un conjunto de creencias y actitudes que definen el sistema político en la forma

normal, adecuada y aceptable de gobierno para las personas. Ese sentido de legitimidad es la base sobre la que debe construirse cualquier gobierno duradero, ya que cuando la gente ve su gobierno como legítimo, no importa lo atroz que le pueda parecer a los extranjeros, lo normal es que se toleren sus excesos y se obedezcan sus órdenes.

La legitimidad no es una cuestión racional y no tiene nada que ver con la moralidad o la capacidad; ha habido grandes naciones a lo largo de la historia han aceptado tranquilamente la legitimidad de gobiernos dirigidos por los ladrones, tiranos, locos o idiotas. Aún así, un gobierno que se ha sostenido durante mucho tiempo sobre la legitimidad popular puede perderla, y hacerlo en un tiempo notablemente corto. Aquellos de mis lectores que tengan edad suficiente para haber visto el colapso de la Unión Soviética y el de sus países satélites del Pacto de Varsovia recordarán la rapidez con que los gobernantes de muchas naciones comunistas vieron como se disolvía todo el aparato de su gobierno a medida que la gente dejaba de cooperar con el sistema.

Por supuesto, un colapso repentino de la legitimidad necesita mucho tiempo para madurar. Al igual que un cantante o escritor que logra un éxito de la noche a la mañana normalmente lo consigue tras muchos años de duro trabajo, la implosión de un sistema de gobierno suele ser consecuencia de muchos años de malas decisiones y de no hacer caso de las señales y advertencias. No es difícil, en retrospectiva, rastrear como se cuecen a fuego lento los disturbios hasta que finalmente llegan al punto de violenta ebullición; aún así, la retrospectiva es tan engañosa como las profecías, ya que en realidad es bastante raro que nadie se dé cuenta de antemano de la que se está liando (aunque después todo el mundo sepa dar explicaciones convincentes). Así pasó con el famoso asunto del collar[1] que arruinó el prestigio de la monarquía francesa —Talleyrand comentó a un amigo: "Preste atención a este maldito asunto del collar; no me sorprendería lo más mínimo que haga caer el trono".— Desde luego Talleyrand fue uno de los más agudos observadores políticos de su época, porque para casi todos los demás en la Francia de 1784, fue sólo otro escándalo real de mal gusto en un país que ya había visto muchos de ellos.

Hemos visto muchos de escándalos de mal gusto en los Estados Unidos en los últimos tiempos, y es fácil ignorar el impacto de, digamos, la negativa sistemática del gobierno de Obama para presentar cargos contra ninguno de los financieros cuyos espectaculares actos de flagrante fraude han inflado hasta hacer reventar la reciente burbuja inmobiliaria. Aún así, he llegado a pensar que un Talleyrand moderno podría ver las cosas de manera diferente. Si Obama hubiese actuado de otro modo, el Partido Demócrata probablemente habría podido dominar completamente la escena política estadounidense durante los próximos cuarenta años algo así como lo que pasó en1932. Sin embargo, al actuar como si de un tercer mandato de George W. Bush se tratase, la administración Obama ha convencido a una considerable parte de los estadounidenses de que nada puede esperarse de ninguno de los partidos. Es sintomático que, según una reciente encuesta de Rasmussen, sólo el 17% de los encuestados crea que la elección entre Obama y Romney es la mejor opción para los Estados Unidos.

Es muy habitual que la clase política de una nación con problemas pierda de vista el hecho de que, después de todo, su poder depende de la voluntad de un gran número de personas comunes para hacer lo que se les dice. En París en 1789, en San Petersburgo en 1917, y en muchos otros tiempos y lugares, las personas que pensaban que tenían las palancas del poder y de la represión descubrieron con estupor que el único poder que en realidad tenían era el poder de dar órdenes, y los que en teoría iban a ejecutar esas órdenes podrían decidir en un momento dado que sus intereses estaban en otra parte. En los Estados Unidos de hoy, igualmente, no son los bien trajeados ejecutivos, políticos y burócratas

[1] El asunto del collar fue una estafa que tuvo por víctima, en 1785, al cardenal de Rohan, obispo de Estrasburgo, y en el que se vio implicada la reina María Antonieta. La relevancia pública del asunto, que redundó en un gran escándalo político y social, contribuyó a hundir la imagen pública de la reina María Antonieta, que se ganó definitivamente la enemistad de la vieja nobleza francesa y perdió el apoyo del pueblo de Francia. Las consecuencias de esto espolearon el descontento popular contra el gobierno de Luis XVI, muy influenciado por la camarilla de la reina.
El torpe manejo que la monarquía francesa hizo del asunto llevó a que comenzara a ser abiertamente desprestigiada por la propia nobleza, socavando de manera fundamental la imagen pública de la monarquía en unos momentos de crisis económica y social; igualmente, puso de manifiesto ante el pueblo la corrupción de la corte y la precariedad de las finanzas públicas, hasta el punto de que el Asunto del Collar suele considerarse como un claro antecedente a la Revolución francesa. Sobre la famosa estafa del asunto del collar, véase información en Wikipedia o aquí.

quienes detentan el poder real que podría ser ejercido en una crisis, sino los cientos de miles de soldados, policías y personal de seguridad del país, por lo general mal pagados, maltratados y mal equipados, y a los que hábilmente se les han ocultado los motivos para apoyar los intereses de una clase política que la mayoría de ellos desprecian en privado, en contra de los intereses de las clases a las que ellos mismos pertenecen.

Tales dudas e insatisfacciones pueden estar larvadas durante mucho tiempo antes de que surja la crisis. Si la historia demuestra algo, es que poner tiempos a una crisis es casi una garantía de fracaso. Más pronto o más tarde, una vez que la legitimidad del sistema se hace suficientemente dudosa, algún acontecimiento lo suficientemente conmovedor será aprovechado por el imaginario colectivo para disparar el colapso final de la legitimidad y la implosión del sistema, pero es imposible saber por adelantado de qué clase será ese evento y cuándo va a producirse. Ni siquiera Talleyrand parece haber adivinado de antemano que la convocatoria de los Estados Generales en 1789 podría desencadenar la crisis final de la monarquía cuyo colapso anticipó. Pero después, ¿quién podría haber predicho la improvisación y las irreflexivas decisiones tomadas sobre la marcha por los líderes del Tercer Estado que proclamaron la Asamblea Nacional? ¿Quién pudo prever las circunstancias que llevaron a las turbas de París al asalto de la Bastilla?

Lo que pasa después del estallido de una crisis es algo más predecible. Francia en 1789 y Rusia en 1917 eran naciones políticamente centralizadas, en el que el poder residía principalmente en la capital, en los políticos revolucionarios y en las multitudes urbanas de París y San Petersburgo, respectivamente. Por lo tanto, lo que allí ocurrió tuvo un impacto enorme e inmediato en el curso de los acontecimientos, y el cambio radical iniciado en la capital se extendió rápidamente por todo el país, ya que no había centros efectivos de poder aparte de los citados. En países menos centralizados, el control de la capital es menos decisivo; la toma del poder por el Parlamento y el motín de Londres en 1641 tuvo estrecha relación con los acontecimientos de las dos revoluciones posteriores, pero cuando se apagaron los rescoldos de la Guerra Civil Inglesa el sistema resultante era mucho más parecido al anterior a 1641 que, por ejemplo, en la Primera República de Francia —lo que siguió a la revolución era radicalmente diferente al Antiguo Régimen.— La supervivencia de los modos habituales de gobierno en los centros periféricos facilitó la restauración del esquema de poder cuando terminó la etapa revolucionaria.

Ese grado de independencia regional no sobrevivió en Inglaterra, pero el patrón europeo de geografía política, donde la capital de cada estado-nación normalmente se convierte en su centro político y cultural y en su mayor centro de población, no tuvo el mismo éxito en Norteamérica. En Estados Unidos y en Canadá, la capital del país y el mayor centro de población son dos ciudades diferentes; en ambas naciones, así como en México, las grandes unidades territoriales (estados o provincias) mantienen una considerable independencia del gobierno central y las culturas regionales siguen siendo una potente fuerza política. Los Estados Unidos es el ejemplo más extremo; Washington DC es a todos los efectos prácticos, una modesta ciudad que casualmente es la sede del gobierno nacional, y no hay lugar en el país en el que incluso los mayores disturbios o motines urbanos podrían tener un impacto decisivo sobre la supervivencia del gobierno federal.

Los procesos históricos complejos que dieron lugar al nacimiento de las trece colonias bajo un único sistema federal, por añadidura, dejaron una gran cantidad de poder en manos de los estados. Muy poco de ese poder se ejerce en estos días; originalmente el gobierno nacional tenía poderes muy limitados aunque con el tiempo han ido aumentando. Cada vez más se dejan cuestiones importantes en manos de los burócratas federales, quedando los estados sin competencias, a lo sumo ejecutar (con sus medios) los costosos mandatos federales. Aún así, el marco completo de gobierno, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se sigue manteniendo dentro de cada estado; los gobernadores de los estados conservan la facultad de llamar a todos los ciudadanos adultos para servir en la milicia del estado; y, por último e importantísimo, los estados han mantenido el poder constitucional de echar el freno y rediseñar todo el sistema.

Fíjense en el inmenso poder enunciado en el artículo V de la Constitución de Estados Unidos. Si dos terceras partes de las legislaturas estatales exigen una convención constituyente para reformar la Constitución, la Convención ha de convocarse; si tres cuartas partes de las legislaturas de los estados votan para ratificar las enmiendas a la Constitución aprobada por la convención, la enmienda entra en

vigor. Es así de simple. El Congreso no tiene nada que decir al respecto; el Presidente no tiene nada que decir al respecto; la Corte Suprema no tiene nada que decir al respecto; el gobierno federal es, al menos en teoría, dejado de lado. Ese poder nunca se ha utilizado; la única vez que se intentó en serio, en 1913, el Congreso se anticipó las legislaturas de los estados proponiendo un enmienda constitucional idéntica a la que proponían los estados para su ratificación. El poder (la capacidad de producir enmiendas a la Constitución) sigue estando ahí, es un arma poderosa para modificar la Constitución.

Lo que hace que esa bomba sea tan potente es que no hay límites a lo que una convención constitucional puede hacer. Lo único que la Constitución especifica es que ninguna enmienda puede cambiar el número de representantes de cada estado en el Senado. Aparte de eso, siempre y cuando dos tercios de los estados exijan la convención y tres cuartas partes de los estados ratifiquen sus mandatos, lo que resulta es la ley suprema del país. Todo es posible; una convención constitucional, por ejemplo, podría dar la necesaria cobertura legal para que los estados se retiren pacíficamente de la Unión, o incluso podrían derogar la Constitución y disolver la Unión.

Si los líderes de los estados del sur en 1860 hubieran sido menos orgullosos y más pragmáticos, es muy posible que hubieran podido obtener su independencia y evitar la catástrofe de la guerra civil mediante alguna medida de este tipo. Es inquietantemente razonable imaginar al senador Jefferson Davis de Mississippi, nombrado para el Senado de ese año, proponiendo una enmienda para la disolución pacífica de la Unión (a causa de las acciones de los radicales en ambos lados de la cuestión de la esclavitud que estaban presionando a la nación hacia la guerra civil) y ofrecer una separación pacífica de los estados como la única solución viable al viejo problema que había dado tantos quebraderos de cabeza a la nación, en un momento en un momento en que la mayoría de los estadounidenses todavía quería evitar la guerra.

Los aficionados a la historia alternativa tienen aquí un campo abierto a la imaginación. Por supuesto, nunca se hizo ninguna propuesta en serio, ni mucho menos fueron aceptadas, pero 1860 ofrece un duro recordatorio: que bajo la presión de un conflicto irreconciliable, el sistema de gobierno de los Estados Unidos puede cambiar muchas cosas e instaurar de inmediato medidas desesperadas. En 1860, el gobierno de Estados Unidos había perdido su legitimidad en un tercio del país, y eso dio lugar al conflicto más sangriento del siglo XIX obligando a los estados del sur a una obediencia incompleta y a regañadientes. En la crisis de legitimidad que está cristalizando en los EE.UU. de hoy, una espiral creciente de conflictos entre las regiones podría también jugar un papel importante, pero esta vez el gobierno federal no parece que pueda contar con la lealtad apasionada del noreste y del Medio Oeste como hace siglo y medio. De hecho, es difícil pensar en cualquier rincón del país donde la desconfianza y descontento hacia el actual gobierno no hayan echado raíces profundas.

No sabemos si llegará la crisis, y de ser así no sabemos cuándo, pero la posibilidad de que los estados puedan ejercer su poder para redefinir la Constitución (bien sea para remodelar el gobierno nacional, o dejar que el país se divida en partes o naciones más pequeñas) existe. Por lo demás, las consecuencias de una crisis de este tipo (de producirse) también son desconocidas. El evento desencadenante podría ser político, económico o incluso medioambiental. Pero, si tuviera que hacer una conjetura, creo que el evento desencadenante sería probablemente militar. Abriremos esa inmensa caja de Pandora la próxima semana.